



¿QUÉ INCIDENCIA TIENE LA PRESENCIA DE MIGRANTES EN LA PROPAGACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO?

Ensayo presentado por:

MARÍA FERNANDA CAÑÓN TORRES

ORCID: 0000-0003-4126-7484

Tutor temático:

CORONEL JAIRO ANDRÉS CÁCERES GARCÍA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

**FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y
SEGURIDAD**

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD

BOGOTÁ D.C.

2021

* Abogada egresada de la Universidad del Rosario. Se ha dedicado al acompañamiento legal de empresas del sector de seguridad y vigilancia privada en Colombia. Candidata a Especialista en Administración de Seguridad de la Universidad Militar de la Nueva Granada: Colombia, correo electrónico: est.maria.canon1@unimilitar.edu.co, <https://orcid.org/0000-0003-4126-7484>.

¿Qué incidencia tiene la presencia de migrantes en la propagación de la delincuencia organizada en México?

¿What impact does the presence of migrants have in the spread of organized crime in Mexico?

***María Fernanda Cañón Torres**

Resumen

El propósito de este texto es analizar la efectividad de las políticas públicas adoptadas por el Gobierno de México, dirigidas a controlar y contrarrestar las actividades ilícitas realizadas por organizaciones criminales dentro su territorio, las cuales se han cimentado, en gran medida, en la presencia de población migrante, principalmente de origen centro y suramericano. Para tales efectos, se estudiará el marco fáctico y jurídico en el que se han fundamentado estas medidas, y se determinará si el aumento de flujos migratorios hacia el país azteca incide en la creación y consolidación de este tipo de grupos delictuales. Por último, se establecerán unas conclusiones sobre el impacto de la llegada de migrantes con relación a la presencia de crimen organizado en el país y se plantearán diferentes propuestas para hacer frente a esta problemática.

Palabras clave

Delincuencia organizada, migración, política pública, flujo migratorio, narcóticos.

Abstract

The purpose of this text is to analyze the effectiveness of the public policies adopted by the Government of Mexico, aimed to controlling and counteracting illicit activities carried out by criminal organizations within its territory, which have been founded, to a large extent, in the presence of migrant population, mainly of Central and South American origin. For such purposes, the factual and legal framework on which these measures have been based will be studied, and it will be determined whether the increase in migratory movements to the aztec country affects the creation and consolidation of this type of criminal groups. Finally, conclusions will be established on the impact of the arrival of migrants in relation to the presence of organized crime in the country and different proposals will be put forward to address this problem.

Key words

Organized crime, migration, public policy, migratory movement, narcotics.

Introducción

El paso a la Modernidad ha dejado claro que los efectos de la globalización no se agotan en la desregularización de los mercados, el imperio de los medios de comunicación y su amplia difusión, los desarrollos tecnológicos o el auge de movimientos migratorios; sino que, paralelamente, aquella ha implicado que la criminalidad se sirva de herramientas que le permitan quebrantar fronteras y convertirse en un problema que deba ser afrontado por la comunidad internacional.

Así, pues, la ejecución de conductas punibles que comprende la participación de personas que operan estructuradamente desde diferentes puntos del globo, ha configurado una nueva modalidad de la criminalidad, la cual se ha denominado *delincuencia organizada*, cuyas organizaciones ostentan un gran poder económico, realizan reclutamiento de individuos eficientes y tienen acceso a tecnología avanzada e información privilegiada, factores que derivan en una gran capacidad de operación.

Aquella noción, además de responder a una disyuntiva que involucra la realización de delitos de carácter transnacional, es decir, aquellos que se encuentran penalizados en las codificaciones locales, pero su contención no logra resultar ser efectiva, salvo que se acuda al apoyo de otro Estados y se configure de manera concertada un complejo normativo que aplique para todos; ha forzado a los diferentes organismos estatales a renovar su accionar de manera continua para responder a un fenómeno que evoluciona de manera exponencial.

Ahora bien, una vez se ha advertido que la delincuencia organizada ha quebrantado los límites nacionales, se debe tener en consideración que en la actualidad no resulta viable la aplicación de “un derecho penal anclado a los cánones propios del surgimiento de los Estados nacionales del siglo XVIII, en los que la legitimidad de los mismos se explicaba para

dar seguridad a los propios ciudadanos frente a los “enemigos externos”” (Zúñiga, 2016). Por el contrario, las pautas establecidas por los Estados para contrarrestar este tipo de delitos, entre los que más sobresalen el Narcotráfico, el Lavado de activos, Terrorismo, Tráfico de personas y Tráfico de órganos, deben trazarse conforme a la naturaleza y el contexto en que estos se desarrollan.

Por lo anterior, se debe impulsar el diseño de una política criminal, cuyos lineamientos no se enclaustran en la mera expedición de un complejo normativo que sancione severamente dichas conductas reprochables, suponiendo "una inflación de normas penales promulgadas apresuradamente" (Corte Constitucional, 1999); sino que, en esencia, se ponga en práctica lo que ya está escrito en múltiples sistemas normativos y, además, se consoliden alianzas con otros organismos internacionales que viabilicen la investigación, persecución y merma de las organizaciones criminales.

No obstante, el establecimiento de políticas públicas que verdaderamente logren combatir la comisión de delitos de delincuencia organizada ha sido infructuosa, más aún en el contexto latinoamericano, donde los diferentes países no cuentan con los recursos humanos y tecnológicos para que la persecución penal de estos delitos sea adecuada y equiparable a las características propias de aquellos. Un claro ejemplo es el de México, donde las respuestas del Estado para contrarrestar la problemática planteada, son el centro de análisis de este ensayo.

De esta manera, surge la siguiente cuestión: ¿Qué medidas debe tener en consideración México para que su lucha contra la delincuencia organizada de resultados significativos?

El objeto del texto es demostrar que las políticas públicas implementadas por México no son viables para contrarrestar y controlar la comisión de delitos de delincuencia

organizada, y, a partir de ello, se desarrollarán unas conclusiones y recomendaciones donde se propondrán medidas a tener en consideración para contrarrestar dicha problemática. De este modo, el texto se dividirá en los siguientes enunciados, los cuales comprenden los supuestos fácticos y normativos que dirigen erróneamente la disputa contra el crimen organizado : 1) no hay un concepto claro y concreto de delincuencia organizada dentro de la legislación actual, siendo inciertos los supuestos en que esta última opera, 2) el crimen organizado es un problema preexistente al incremento de los flujos migratorios hacia este país en las últimas décadas y, finalmente, 3) existe una participación irresponsable de los medios de comunicación, los cuales desvinculan a las autoridades públicas de su responsabilidad en la materia y su incapacidad de hacer frente al crimen organizado.

1. El concepto de delincuencia organizada en la legislación mexicana: inseguridad jurídica en su aplicación a casos concretos

Las definiciones que se atribuyen a la delincuencia organizada son múltiples. Sin embargo, a pesar de no contar con un concepto unificado, si se pueden desprender sus elementos estructurales, que se pueden evidenciar a continuación:

- (i) Son ejecutados por una pluralidad de sujetos, quienes conforman una agrupación de tres o más personas y que se conciertan para la comisión de uno o varios delitos.
- (ii) Los sujetos activos o autores del delito buscan que las actuaciones se extiendan de manera permanente o indeterminada en el tiempo.
- (iii) Estructura organizada de sus integrantes.
- (iv) Las operaciones son de carácter internacional, sin supeditar que también se puedan desarrollar en el orden territorial interno.

- (v) Protección de instituciones públicas y privadas de sus integrantes, quienes obstaculizan la acción estatal.

Previsto esto, es conveniente examinar la definición planteada por la legislación mexicana de delincuencia organizada, la cual se plantea en la *Ley Federal sobre Delincuencia Organizada*:

“Art.2º- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada (...)”

De la noción expuesta, es manifiesta la falta de enunciación de algunos de los elementos mínimos para que diversas conductas reprochables puedan enmarcarse dentro de los tipos penales que conforman los delitos de crimen organizado; todo ello, convergiendo en inseguridad jurídica, pues no se enuncia que los sujetos activos deben constituir una estructura necesariamente *organizada*, situación que representa una clara diferencia con delitos que se limitan al concierto de varios integrantes para cometer un crimen, como el de Asociación delictuosa.

Por otra parte, se excluye uno de los elementos más distintivos de esta forma criminalidad, esto es, el uso de influencias o corrupción (González, s.f , p.20), que es un dilema fáctico de gran preocupación, pues la corrupción de diversas instituciones, en mayor medida de naturaleza pública, ha implicado que se identifiquen a servidores públicos como miembros de organizaciones criminales.

Para ilustrar, distíngase el caso de Margarita Rojas Rodríguez, directora de un centro penitenciario en Durango , la cual durante el primer semestre del año 2010 , permitió salir a

un grupo de internos asesinos del reclusorio que dirigía, quienes después se les reconocería como el “Escuadrón de la muerte”, facilitándoles las armas y herramientas necesarias para ir y arremeter en contra de dueños de bares donde se produjeron las masacres que se relacionaron rápidamente con el narcotráfico.

De igual forma, en noviembre de 1995, cuando un avión jet del Cartel de Cali aterrizó en territorio mexicano, el cual estaba cargado de cocaína, testigos reconocieron que miembros de la Policía Judicial Federal Mexicana, en uniforme, descargaron el avión; sin embargo, la mercancía evaluada en cien millones de dólares en el mercado norteamericano de menudeo simplemente desapareció (Fuerza de Trabajo Independiente, 1997).

En consecuencia, no resulta extraño que las políticas públicas encaminadas a contrarrestar el crimen de organizado no se materialicen, si las autoridades de quienes se espera las creen, ejecuten y supervisen su aplicación y cumplimiento, son las mismas que obstaculizan la persecución penal del ilícito.

2. El crimen organizado en México es un problema preexistente al incremento de los flujos migratorios hacia este país en las últimas décadas

Las migraciones son un acontecimiento inherente a la historia de la humanidad; y, a pesar de su carácter continuo, hay quienes aseguran que la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI conforman una “era de migración” (Castles, Miller y Quiroz, 2004). Estas pueden ser entendidas como el “desplazamiento de individuos con traslado de residencia, desde el lugar de origen, o lugar de salida, al lugar de destino, o lugar de entrada” (IUSSP, 1959).

*relación con este territorio una **transmigración**, o migración de tránsito” (Ibidem).*

Ahora bien, dentro del contexto mexicano, se presentan cuatro patrones migratorios de forma simultánea:

“i) alta emigración de connacionales principalmente hacia los Estados Unidos de América, ii) migración de retorno de aquellos ciudadanos mexicanos que regresan, ya sea por deportación, o por voluntad propia, iii) migración de tránsito, que en su mayoría es centroamericana, la cual pretende llegar al país estadounidense, y, por último, iv) la inmigración, la cual refiere al establecimiento de mediana y larga data de extranjeros dentro del territorio” (Muñoz, 2010).

Respecto de los dos últimos patrones, en los cuales se destacan los movimientos de población extranjera hacia México, ya sea de manera transitoria o con tendencia a un establecimiento permanente, son aquellos donde recae el interés de estudio, en tanto su incremento durante las últimas décadas, ha despertado la inquietud de su incidencia en la proliferación de criminalidad organizada en el país.

A lo largo de la historia, millones de inmigrantes han establecido a México como su hogar. En el caso sudamericano, los desplazamientos de la población empezaron a propagarse a partir de la década de los setenta, la cual buscaba, principalmente, protección internacional a causa de los regímenes dictatoriales que prevalecían en la época; mientras que, una década después, se dieron las migraciones de personas de países de Centroamérica que huían del conflicto de la región, principalmente de las provenientes de Guatemala (Cobo y Cruz, 2012, p.131).

Con todo, para establecer la relación de la llegada de población migrante a México con el auge del crimen organizado, se analizará la propagación del Narcotráfico en el territorio, como delito que más sobresale dentro de esta problemática.

El consumo de sustancias psicoactivas en México se remonta al periodo prehispánico, donde los pueblos, naciones e imperios primigenios, estaban en continua búsqueda de comunicación con sus dioses (Enciso, 2015, p. 21); y, a pesar de que estas no fuesen concebidas como un mal generalizado desde un principio, con la conquista española estas prácticas empezaron a ser abolidas.

Por lo anterior, la prohibición del consumo de narcóticos a lo largo del tiempo ha atendido a los intereses de quien detenta el poder. Si durante la época de la Colonia el afán de la corona española era dominar los territorios del Nuevo Mundo, también y con ello, arrasar con sus prácticas religiosas, hoy en día puede endilgarse a los intereses del narcoimperialismo estadounidense (Ibidem), quien “constituye el mercado más grande del mundo en materia de ingresos” (Fuerza de Trabajo Independiente, 1997, p. 24).

Luego de la transición de una visión religiosa del consumo de sustancias alucinógenas a un enfoque de corte prohibicionista, se estipuló un hito histórico que establece que el tráfico de drogas surge en México a finales del siglo XIX y principios del XX, con la llegada de población china al estado de Sinaloa que se ocupaba de los cultivos de opio (Fernández, 2010, p. 3). En contraposición, otras teorías se ocupan en desvirtuarlo, resaltando que fueron las familias nobles de Sinaloa las que controlaron la producción y exportación del opio, y, posteriormente, a la marihuana, la cocaína y al resto de las sustancias que hoy comercializan los carteles (Enciso, 2015).

Lo cierto es que, para principios del anterior centenio, se establecieron las bases para que, a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, se fundara el primer cartel del narcotráfico en México, el de Guadalajara, liderado por Félix Gallardo, conocido como el "Jefe de Jefes" y, consecutivamente, los de Tijuana, Juárez, del Pacífico y del Golfo, entre otros.

Expuesto lo anterior, resulta errado considerar que los flujos migratorios de extranjeros, principalmente desde Centro y Suramérica, los cuales se empezaron a incrementar a partir de las últimas décadas del siglo XX, implican la consolidación del crimen organizado, en tanto es una problemática que ya estaba presente en el país, pues su misma población se ocupa de tratar cultivos de opio; y, por su parte, la estigmatización de migrantes centro y suramericanos no tiene en consideración que múltiples sustancias llegaron de otros países, primariamente de Europa, como es el caso de la morfina, heroína y cocaína, invención realizada por científicos alemanes mediante el estudio de las plantas del nuevo continente (Enciso, 2015).

Finalmente, sobresale que resulta necesario prever una política migratoria que, al mismo tiempo de ser receptiva con el migrante, también establezca mecanismos que protejan la seguridad nacional, mediante criterios que sean selectivos, pero también objetivos, situación que se ha visto sesgada, como se evidenciará a continuación.

3. La participación irresponsable de los medios de comunicación en la lucha contra la delincuencia organizada

Los medios de comunicación juegan un rol preponderante a la hora de hacer frente al crimen organizado. Estas máquinas difusoras de información son fundamentales para asentar ideas colectivas que responden a objetivos de grupos de poder estatales y privados, como el dominio de un sector social.

De modo que, si se parte de la premisa de que estas herramientas informativas implementan determinadas concepciones a cada individuo de la sociedad, resulta contraproducente que, hoy en día, donde se llevan a cabo todo tipo de procesos de integración

entre los diferentes países, los cuales involucran irreparablemente la libre circulación de personas; aquellas divulguen un juicio erróneo y agresivo sobre la presencia de extranjeros en el país como personas propagadoras de criminalidad, conllevando a un rechazo generalizado de estas comunidades por los residentes mexicanos, por ejemplo, la colombiana.

Esto se puede evidenciar en los siguientes titulares publicados por estos medios:

“Colombianos, extranjeros que más delinquen en CDMX: PGJ: los extranjeros que siguen en las estadísticas son peruanos y venezolanos; las tendencias muestran una inclinación por actos como robo a casa-habitación, y sustracción y clonación de tarjetas de crédito” (Cruz, 2017).

“Delitos de extranjeros; llegan de visita a la ciudad y delinquen: colombianos, los que lideran las detenciones, de acuerdo con cifras de la PGJ” (Cruz, 2017).

De esta manera, resulta evidente una tendencia de los medios de comunicación de responsabilizar a las personas de otras nacionalidades de los altos índices de criminales, ya sea organizada o común, dentro del país; sin embargo, estos comunicados reproducen los informes suministrados por las autoridades mexicanas, principalmente de la Procuraduría General de la República (PGR), exculpando la ineficacia de sus acciones para contrarrestar la delincuencia. De este modo, no resulta anómalo que la población mexicana esté empezando a formar un criterio de rechazo en contra de extranjeros, si sus autoridades y medios masivos de comunicación reiteran esta posición.

Por otro lado, también se sigue introduciendo en la sociedad mexicana, a partir del periodismo, proyectos cinematográficos y la literatura, la cultura “narco”, que tergiversa las características propias de poblaciones como la colombiana.

Según Arturo Santamaría (2012), el país se está viendo inmerso en un proceso de “colombianización”. “La validez de las narcoseries emanadas de la tierra de la cumbia radica en que no apologizan al narco, pero sí captan y recrean visualmente sus códigos, sus reglas, sus lenguajes” (Santamaría, 2012). Así, entonces, ya es habitual hablar del “sapo” (persona que delata), el “traqueto” (traficante de drogas), la “mula” (persona que lleva consigo droga de contrabando a cambio de una retribución económica) o el “patrón” (quien dirige la organización). En definitiva, esto puede significar un retroceso frente las alianzas que se han forjado entre Colombia y México en las últimas décadas; pareciera que se hubiese olvidado “la participación de José María Melo Ortiz después de haber ejercido la presidencia de Colombia, en el ejército liberal de Benito Juárez en el siglo XIX y quien fuera finalmente fusilado por el ejército conservados en Chiapas” (Martínez, 2009); los movimientos culturales que promovieron los colombianos en el país, como lo son:

“(…) la música con el bambuco en Yucatán, la cumbia y el vallenato arraigados principalmente en Nuevo León, las esculturas del maestro Rómulo Rozo en Mérida, la poesía y la literatura (...) con la llegada de importantes poetas, escritores y artistas como Porfirio Barba Jacob, Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis y Fernando Vallejo, entre otros” (Martínez, 2009).

Inclusive, en tiempos más recientes, se han firmado Tratados de Libre Comercio entre los dos Estados, como el Acuerdo del G3— ahora G2 tras la salida de Venezuela, firmado en el año de 1994, y la Alianza del Pacífico, en el año 2011, integrada, además de Colombia y México, por Chile y Perú, los cuales pretenden recudir las trabas comerciales entre dichos Estados y que sus ciudadanos puedan circular entre ellos, sin necesidad de mayores requisitos migratorios.

CONCLUSIONES

La delincuencia organizada no es una problemática que pueda ser erradicada de manera tajante; de hecho, es un fenómeno inherente a las sociedades que requiere de la elaboración un plan articulado internacional que permita contrarrestarlo, una vez rebosa la esfera interna de los territorios y se vale de los mejores medios tecnológicos y humanos que ofrecen nuestros tiempos.

En el caso mexicano, y de algunos otros, esto será posible si el órgano legislativo tiene en cuenta los criterios mínimos para que se configure un delito de crimen organizado y se logre diferenciar de otros, al momento de judicializar a las personas.

Evidénciese, en el caso del Narcotráfico, que no tiene mayor efectividad proceder a la judicialización de los vendedores de droga de manera aislada, sino que resulta más conveniente realizar la investigación de la organización de la que hace parte, para conllevar a su total desmantelamiento.

RECOMENDACIONES

Sobresalta la necesidad de que México refuerce sus lazos con otros Estados y Organismos Internacionales en aras de conformar una red de cooperación entre estos, que involucre la ayuda mutua en el suministro y verificación de información, así como de la realización de operaciones y gestiones solicitadas dentro del territorio que se requiera.

Por su parte, resulta fundamental un cambio de posición de las autoridades mexicanas frente a este dilema. De lo expuesto, se puede patentizar que han adoptado una posición en la que desligan su responsabilidad frente al asunto, aun partiendo del supuesto que para que se mantengan las operaciones criminales organizadas es necesaria la intervención de algunos de sus funcionarios. Para estos propósitos, resulta esencial implementar mecanismos de control

más rigurosos dentro de las entidades públicas, para que aquellos agentes que se vean envueltos en agrupaciones de crimen organizado, les resulte más difícil obstruir la investigación y sanción de los delitos cometidos.

Con relación a lo anterior, valga resaltar la inviabilidad de señalar al incremento de flujos migratorios hacia México, principalmente provenientes de Centro y Suramérica, como un factor que incide en la propagación en el crimen organizado en el país. Si bien es cierto que este tipo de criminalidad tiene un carácter internacional, es deber de las autoridades migratorias diseñar medidas que garanticen que las personas que ingresen al territorio sean evaluadas bajo criterios objetivos y no estereotipos.

Agréguese, que la solución no reside en el incremento de las penas para los sujetos que cometan estos delitos, pues como se ha observado, tras la expedición de estas leyes, no ha habido una disminución de la criminalidad organizada, sino, en sentido contrario, una reincidencia en las conductas; ni en el despliegue de acciones desmedidas de las fuerzas armadas, como impulsó el gobierno de Felipe Calderón, las cuales podrían acarrear violaciones a Derechos Humanos.

La verdadera respuesta a la delincuencia organizada es la educación de los ciudadanos en la participación de medidas que deben ser tomadas en beneficio propio; y, durante esta labor, debe difundirse una cultura que promueva conocimientos constructores y formadores de una sociedad crítica y con deseos de mejorar, priorizando las necesidades de grupos marginados que no tienen más alternativas para su subsistencia que pertenecer a un grupo delincuencial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Resolución 55/25 de 15 de noviembre de 2000.
- Castles, S. y Miller, M. La era de la migración. Movimientos internacionales de población en el mundo moderno. Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2004.
- CIDH. Opinión consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, 2003.
- Cobo, S. y Cruz, J. Población nacida en el extranjero en México. En Ramírez, T; y Ángel, M. (Coord.). *El Estado de la migración. México ante los recientes desafíos de la migración internacional*. México: CONAPO, 2012.
- Congreso de la Unión, Ley Federal sobre Delincuencia Organizada de 7 de noviembre de 1996.
- Corte Constitucional, Sentencia C-559 de 4 de agosto de 1999, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero.
- Cruz, F. (2017). Colombianos, extranjeros que más delinquen en CDMX: PGJ. *El Excelsior*. Recuperado de <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/06/1144577>.
- Cruz, F. (2017). Delitos de extranjeros; llegan de visita a la ciudad y delinquen. *El Excelsior*. Recuperado de <http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/06/22/1030706>.
- Enciso, F. *Nuestra historia narcótica: pasajes para (re) legalizar las drogas en México*. Ciudad de México: Penguin Random House Grupo Editorial, 2015.
- Fernández, J. *Derecho penal liberal de hoy*. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2007.
- Fernández, J. Breve historia social del narcotráfico en Sinaloa. *Revista Digital Universitaria*, 11(8), 3-13. Recuperado de: <http://www.revista.unam.mx/vol.11/num8/art82/art82.pdf>, 2010.
- Fuerza de Trabajo Independiente. *Reflexiones sobre el control internacional de las drogas: nuevas directivas para la política norteamericana*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1997.
- González, R. (s.f.). Medidas políticas-criminales contra la delincuencia organizada. *Colección Memorias*, 17-27.
- Huertas, O. La sociedad mundial y los delitos transnacionales. *Logos Ciencia & Tecnología*, 1(2) .8-19. Recuperado de: <http://revistalogos.policia.edu.co/index.php/rlct/article/view/45/254>, 2010.
- Martínez, E. Migración colombiana hacia México, Centroamérica y el Caribe. En A. Bidegain, *Recopilación y análisis de la literatura existente sobre la emigración colombiana hacia Europa y América Latina*. Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores. 173-216, 2009.
- Moreno, M. Política criminal frente a la delincuencia organizada en México. En: S. García y L. Vargas, ed., *Las reformas penales de los últimos años en México (1995-2000)*, 1a ed. [en línea] Ciudad de México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pp.147-

167. Disponible en: <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/131-las-reformas-penales-de-los-ultimos-anos-en-mexico-1995-2000>, 2016.

Santamaría, A. *Las jefas del narco: el ascenso de las mujeres en el crimen organizado*. Ciudad de México: Grijalbo, 2012.

U.S. Supreme Court citado en David A. Martin. (2012). Human Rights and Migration Management: of Complexity, Balance, and Nuance. *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, 106, 69-72.

Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población - IUSSP. *Diccionario Demográfico Multilingüe*. Recuperado de: http://www.demopaedia.org/tools/spip.php?page=generate_dictionary&edition=es-i&format=html, 1959.

Zúñiga, L. El concepto de criminalidad organizada transnacional: problemas y propuestas. *Nuevo Foro Penal*, [en línea] 12(86), 62-114. Recuperado de: <https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/view/3646>, 2016.